

**Cuestiones políticas, socioculturales
y económicas del Sudoeste Bonaerense**

Mabel Cernadas de Bulnes

José Marcilese

(Editores)

Actas de las

IV Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina

7, 8 y 9 de septiembre de 2006

Universidad Nacional del Sur

Secretaría General de Comunicación y Cultura

Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur

Cuestiones políticas, socioculturales y económicas en el sudoeste bonaerense :

Actas de las IV Jornadas interdisciplinarias del sudoeste bonaerense /
compilado por Mabel Cernadas de Bulnes y José Marcilese - 1a ed. -
Bahía Blanca : Universidad Nacional del Sur, 2007.

400 p. ; 25x22 cm.

ISBN 978-987-23429-0-6

1. Política. 2. Economía. 3. Historia. I. Cernadas de Bulnes, Mabel, comp.
II. Marcilese, José, comp. III. Título
CDD 320 : 330

ISBN 978-987-23429-0-6

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Bahía Blanca, Argentina, marzo de 2007

Las opiniones vertidas en los artículos son exclusiva responsabilidad de sus autores.

IV Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina

7, 8 y 9 de septiembre de 2006 / Bahía Blanca

Comité organizador

Mabel Cernadas de Bulnes

María Elena Ginóbili

José Marcilese

Adriana Rodríguez

María del Carmen Vaquero

Comité académico

Hugo Arelovich

Margarita Bróndolo

Nidia Burgos

Néstor Cazzaniga

Ana María Cignetti

Silvia Gorenstein

Ricardo Gutiérrez

Silvia Grippo

Laura Llull

Ana María Malet

Elda Monetti

Elizabeth Rigatuso

Declaradas de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (D/686/06-07)

Declaradas de interés educativo y auspiciadas

por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (Resolución 684)

Declaradas de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca (Ordenanza 13.815)

Declaradas de interés cultural por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Índice

Presentación

Mabel N. Cenadas de Bulnes y José Marcilese	11
---	----

Relaciones interétnicas

Claudia Iribarren: Blancos, indios y negros en el Fuerte del Carmen de Patagones: análisis de la conformación social en la década 1810-1820.....	15
María Mercedes González Coll: De historia, memoria, olvido y reflexión.....	23
Ayme Lazcano - María Mercedes González Coll: La opción de un dirigente.....	31
María Jorgelina Ivars: Relaciones interétnicas e imagen fotográfica. Puesta en valor de documentación presente en Bahía Blanca	41
Walter Alejandro Paris: El Fuerte Nuestra Señora del Carmen estrategia virreinal y relaciones interétnicas	51

Partidos y prácticas políticas

Leandro A. Di Gresia - La conflictividad jurídica en el Sur bonaerense: una aproximación cuantitativa desde un estudio de caso (Tres Arroyos, 1868-1900)	61
Laura C. del Valle - Silvia G. Gamero: Contradicciones ideológicas y ocupación de espacios políticos: el poder ejecutivo bahiense en el contexto de la revolución de 1893 en la Provincia de Buenos Aires	71
Laura Llull: El “pequeño proyecto” del diputado nacional Valentín Vergara: semillas para los agricultores del partido de Puán (1918)	79
Roberto D. Cimatti: Reforma o revolución. acerca del debate en el socialismo de Bahía Blanca y el IV Congreso Extraordinario del Partido Socialista	87
Mabel N. Cenadas de Bulnes: La democracia en cuestión: el radicalismo bahiense ante la crisis de los años treinta.....	95
José Marcilese: El asociacionismo profesional bahiense durante los años del primer peronismo. El caso de la Asociación Médica de Bahía Blanca	105
Adriana S. Eberle: Contextualización ideológica de la definición de Bahía Blanca como polo de desarrollo desde el discurso del radicalismo intransigente.....	113
Patricia Orbe: La exaltación de la figura del mártir juvenil en la comunidad universitaria bahiense: prensa, estudiantes y cultura política en 1957	121
Andrea Belén Rodríguez: “Malvinas en las escuelas” en el contexto de luchas por la memoria de la guerra.....	131

Prensa y sociedad

Omar Chauvié: Noticias de ayer: prensa política en Pago Chico.....	141
María de las Nieves Agesta: El barómetro de la cultura. Luz y sombra:	149
Gisela Popp: El Círculo Católico de Obreros desde la óptica de la prensa bahiense	157
Lucía Bracamonte: “La mujer bahiense opina”. Posturas en torno a los derechos de las mujeres en una revista femenina de la década de 1930.....	163
Belén Zapata: El Cordobazo y el conflicto social en Bahía Blanca. Análisis del relato de <i>La Nueva Provincia</i>	171
María Julia Giménez: La Universidad como problema en el discurso de <i>La Nueva Provincia</i> : 1966-1976.....	179
María Lorena Montero: Memorias del golpe en <i>La Nueva Provincia</i> (1976 - 2006).....	187

Arte y sociedad

Flavio Bevilacqua- Laura Villalobos: Iniciativas para la fundación y desarrollo de un club social: el Club Argentino	197
Analia Bernardi - Victoria Casamiquela - Juan José Mateo - María Laura Prost: Historicismo y hegemonía: el edificio central del Complejo Alem de la UNS	205
Diana I. Ribas: Psicoanálisis e historia local: un posible abordaje en torno a la formación de la identidad bahiense	211
Rodrigo Javier Vecchi: Rumbo al oriente eterno: registro material y masonería en el cementerio municipal de Bahía Blanca	217
Laura I. Villalobos: Aportes de Italia a la arquitectura local.....	224

Problemáticas culturales

Gustavo Chalier: Poder, historia y nominación: la toponimia urbana y la construcción de la identidad histórica en Punta Alta.....	235
Diego Cejas: Himno a Bahía Blanca: una introducción a la épica del centenario	241
Celia Taich: Influencia de la ideología de Domingo Faustino Sarmiento en el progreso de Bahía Blanca	251
Bruno Leonardo Fernández: Legalización de la prostitución en la región de Bahía Blanca	259
Susana Martos: Papeles privados y vida cotidiana en Bahía Blanca y la región a principios del siglo XX.....	265
Lucy Pelliza: Medicinas populares en Bahía Blanca.....	273
Nilsa Mercedes Alzola de Cvitanovic: La integración patagónica a nivel latinoamericano según Domingo Proncato	279

Problemáticas migratorias

María Elena Ginóbili - Alicia Pérez - Mabel Giménez: La interculturalidad: desafíos y problemas en el mundo de las migraciones bolivianas en el Partido de Villarino.....	287
Fabiana Sabina Tolcachier: ¿Cosechamos doctores? judíos de Villarino en Bahía Blanca hacia la segunda mitad de siglo XX.....	293
Alejandro Alberto Suárez: Inmigrantes croatas en Bahía Blanca: testimonio de sus protagonistas	301
Sandra Rosetti - Ana Miravalles: Inmigrante trentinos en Bahía Blanca (1900-1955) El trabajo como factor de tensión entre continuidad y cambio cultural	309
Ana María Fernández: Una inmigrante vasca afirmada en su identidad.....	317
Laura Orsi: Visiones acerca de los inmigrantes uruguayos: sobre la in/mutabilidad de los estereotipos	325

Problemáticas sociales contemporáneas

Stella Maris Pérez - Claudia Cattaneo - María Martha Formichella: Análisis de la implementación del programa social “volviendo a comer en casa”	335
Melania Marína Marcenac: El conflicto por la recuperación de la fuente laboral en las plantas de Gatic Pigüé.....	343
María Belén Noceti: Dimensiones cualitativas del trabajo infantil en Bahía Blanca	351
Marcela Vitali: Repercusiones de la crisis política del 2001 en Bahía Blanca: aportes para comprender la inacción social	359
Fernando Romero - Iván Grasso - Eugenio Monforte: Huelgas en Bahía Blanca durante el gobierno de la Alianza (1999-2001).....	367

Hegemonía y contrahegemonía en los procesos de regionalización del sudoeste bonaerense

Natalia P. Fanduzzi: Embestidas y contragolpes: la definición del trabajo en el puerto de Ingeniero White a principios del siglo XX	377
Rocío Parga: La resistencia de los whitenses ante el avance global.....	385
Elena B. Torre: Voces y tensiones en torno a un conflicto en un espacio de complejidad	393
Adriana C. Rodríguez: Un impacto desde la diáspora: Claves para la articulación de la Hegemonía en la zona costera del S.O. Bonaerense	403
Rodrigo González Natale: El proyecto del Puerto Militar y la prensa bahiense a fines del siglo XIX: navalismo y estrategia mahaniana.....	409

Perspectivas económicas

Ricardo Raúl Gutiérrez: Asociatividad en proyectos y capital social: la experiencia en Bahía Blanca	417
Francisco J. Cantamutto: Acerca de la concepción académica de conocimiento en economía	423
Raúl F. Ortiz - María C. Lagier - Alicia Dieter: Comportamiento social de las agro-industrias de Bahía Blanca	429
José Ignacio Díez: Recuperar la agenda del desarrollo económico y de la competitividad en Bahía Blanca: la visión de las organizaciones de apoyo a la producción.....	437
Tomás Loewy: Sudoeste Bonaerense, una provincia: vigencia de una idea centenaria	445

Economía regional

Liliana Cerioni - Silvia Morresi: Perspectivas de evolución del mercado de gas natural en Argentina. Posibles impactos sobre la economía local.....	451
Carina Guzowski - Marina Recalde: Problemática actual del abastecimiento eléctrico en la región del Sudoeste: Participación y potencial de las energías renovables	459
Ilda María Ferrera-Fanny Martín: La producción salinera regional y su relación con Solvay Indupa	465

Economía y medio rural

Gabriela Cristiano: El proceso de sojización en el sudoeste bonaerense: análisis de una década	475
Regina Durán - Liliana Scoponi - Lorena Gandini- María Susana Fuertes - Marina Cordisco - Luis Caro Gustavo Boyer - Cristina Pitsch - Gabriela Pesce - Fernanda Lucchetti - Mariano Aguirre - Giannina Fermannelli: Desarrollo sustentable del medio rural: la forestación como instrumento para mejorar la sostenibilidad de los sistemas productivos tradicionales del Partido de Bahía Blanca en tierras marginales.....	481
Lucrecia Obiol - M. Carolina Pirillo - Lucía A. Sarro - Fernando J. Bostal: Sudoeste Bonaerense - potencialidad para el desarrollo de un cluster olivícola	487
Lorena Tedesco - Marta Susana Picardi: Clusters en el sudoeste bonaerense: espejo local del mapa nacional	497

**Hegemonía y contrahegemonía
en los procesos de regionalización
del sudoeste bonaerense**

Voces y tensiones en torno a un conflicto en un espacio de complejidad

Elena Torre
Departamento de Humanidades - UNS
torree@criba.edu.ar

“Los resultados de una economía se evalúan por la calidad de los individuos que ésta produce culturalmente”
(Max Weber)

Introducción

*“Si el viento no hubiera obrado a favor, el encuentro de hoy -en lugar de una convocatoria a la memoria- sería un recordatorio de víctimas”.*¹ Palabras de este tenor se dejaron escuchar entre las personas que el pasado 19 de Agosto no faltaron a la cita que, en vísperas de cumplirse seis años del escape de cloro, convocó la agrupación “Cultura en Movimiento”.

La consigna “El aire no es mercancía” dio sentido al festival de arte callejero de esa jornada, cuyo propósito fue activar la memoria y apelar a la conciencia de los pobladores de Ingeniero White.

Manifestaciones de este tipo, que promueven la resistencia al olvido se replican año tras año desde Agosto de 2000, fecha en que se produjo un accidente tecnológico en la planta productora de cloro y soda cáustica de la empresa Solvay –Indupa, radicada en el Polo Petroquímico del partido de Bahía Blanca.

Este hecho desplegó una constelación de intereses materiales y simbólicos subyacentes en el seno de la comunidad local, que cobraron forma y hallaron expresión en torno a un “conflicto”.

En nivel de conflictividad social se acentuó a partir de ese evento. Sin embargo, sería erróneo afirmar que antes del suceso no existían posiciones encontradas en torno a la presencia de la industria química y petroquímica en el ámbito local. Es más acertado señalar que las voces contrarias a este tipo de industrialización elevaron el tono y se hicieron más audibles a partir del accidente. Un recorrido histórico sobre los orígenes y desarrollo del Complejo Petroquímico Bahía Blanca (CPBB) en la localidad de Ingeniero White nos permite sostener que se trataba de un conflicto latente, instalado en el colectivo social, y que el accidente tecnológico operó de disparador.

Por tanto, entendiendo al conflicto como motorizador de cambios sociales, este trabajo pretende aproximarse a una reconstrucción del espacio o campo –en el sentido bourdiano- de participación social que se generó en el plano local con relación al conflicto ambiental.

La reconstrucción de ese campo supuso una tarea central para los fines de este análisis. Recurriendo a las herramientas metodológicas de la sociología se procuró trazar un “mapa” que permitiese la identificación de los sectores empresariales, políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, comprometidos o con incumbencia directa en la problemática.² El objeto de esta tarea supuso registrar y analizar las reacciones y acciones de los actores intervinientes, la tensión y presión que generó la radicalización de postura de un sector de la comunidad, la trama de alianzas entre sectores y el lugar que asumió al gobierno local como componente central en la resolución de dicho estado de cosas.³

A partir del desarrollo de los objetivos señalados intentaremos definir si efectivamente la crisis ambiental marcó un nuevo reposicionamiento de actores, como así también la ampliación del espacio de participación ciudadana. En este

sentido, sin pretender arribar a definiciones concluyentes, este estudio de caso representa solamente un ejercicio de indagación que intenta introducir la validez de la premisa weberiana de conflicto como fuerza motriz del cambio social y coalición social como instrumento de control político.

Los marcos contextuales de participación ciudadana

Si primariamente “participar”, quiere decir “ser capaz de hablar con nuestra propia voz”⁴, el conflicto en análisis da cuenta de múltiples formas de expresión que utilizó la comunidad local para hacer escuchar su postura. Desde procesos deliberativos en marcos formales, como asambleas, comisiones y petitorios; hasta modalidades más radicalizadas de manifestación como movilizaciones callejeras, cortes de rutas, piquetes de vecinos autoconvocados y “escarches”, fueron instancias de participación pública donde intervinieron los principales actores vinculados al conflicto, ya sea en carácter de generadores o receptores de sus consecuencias.

Esta dinámica enunciada en el plano local, nos invita a pensar y a indagar sobre el tema, desde algunas aristas de la Teoría Social del Cambio que introduce Max Weber (1922), retoma Dahrendorf (1961) y enriquece J. Habermas con su Teoría de la Acción Comunicativa (1981).

Un acercamiento a la obra política de Max Weber, permite encontrar interpretaciones a su discurso que posibilitan su aplicación a la realidad presente. Así, siguiendo la huella del concepto de cambio social que el pensador alemán deja inferir en *Escritos Políticos*, (1924)⁵ y recurriendo a la consulta de un especialista de su vasta obra⁶, hallamos algunos de los fundamentos de la dinámica social que operan en un contexto democrático.

Max Weber postula la idea de democracia como “sociedad abierta”, donde el cambio político y social es posible porque no existen certezas⁷. Al presentar a la democracia como incertidumbre y entonces, “...al no admitir certidumbre alguna, la democracia no niega el conflicto social, lo institucionaliza, acotándolo en ámbitos de negociación, de compromiso político que permitan llegar a acuerdos sociales de suma positiva”⁸. La reivindicación que hace Weber del conflicto, presenta dos aspectos que nos interesa destacar. En primer lugar entendemos que al otorgarle carácter de acción, lo legítima como vehículo de cambio, que dispone de capacidad transformadora. En este orden cobra sentido la democracia en tanto sistema que no repele o neutraliza el conflicto sino, por el contrario, le da cabida porque cuenta con un ordenamiento constitucional y ámbitos institucionales donde canalizar los conflictos, reconvirtiéndolos en acuerdos de partes y soluciones. Sin duda, la organización de la sociedad civil en asociaciones intermedias y la actuación político partidaria, constituyen los pilares que garantizan los derechos de participación y representación ciudadana.⁹

Continuando la línea de pensamiento weberiano, Ralf Dahrendorf, recrea la idea de incertidumbre como parte de la existencia humana, para justificar el sentido antropológico del conflicto social¹⁰. Desde esta perspectiva, enriquece la teoría weberiana del cambio social, al introducir el concepto de “Oportunidades Vitales” (Life Changes). Las oportunidades vitales son concebidas como “...probabilidades de realización individual delimitadas por las estructuras sociales, que son quienes dan su sentido a la misma”. Asimismo, los componentes constitutivos de las oportunidades vitales son las opciones, esto es, “... las probabilidades estructurales de elección que corresponden a las acciones individuales y los vínculos o lazos, que definen la integración del individuo a los grupos sociales que dan sentido a la acción individual, al ser su punto de referencia”.¹¹ En síntesis, para el autor las oportunidades vitales surgen de la interacción de opciones y vínculos ya que ambas son indisolubles, pues las opciones sin vínculos provocan anomia y los vínculos sin opción, producen la opresión. La combinación de elecciones y relaciones constituye un factor sustantivo para el cambio social que se completa con la idea de probabilidad, de oportunidad -que también rescata de Weber- en el sentido que este la utiliza como “ocasiones que ofrecen las estructuras sociales”. La enunciación de esta teoría lleva a Dahrendorf a hacer suya una frase de Weber: “Llamamos derechos a las oportunidades apropiadas”¹²

Recapitulando entonces, las posibilidades de realización individual en un marco político democrático, sólo encuentran sentido a través de los lazos sociales. Esta afirmación nos obliga a detenernos en el concepto de comunidad. A los efectos de este trabajo, la idea de comunidad toma como referente la percepción de lo local, aquella construcción socio-espacial inmediata, conocida, enraizada en una identidad común. En este sentido, “El centro de transformación es la comunidad, no la sociedad, desde donde se estimula la cooperación solidaria, el manejo local de los propios problemas”.¹³ Vale decir, la participación localista o participación focalizada, en la actualidad se ha convertido en un espacio promotor de cambios y de construcción de consensos.¹⁴ El advenimiento de la democracia en nuestro país, la desaparición del Estado de Bienestar, el retiro del Estado como institución garante de los derechos sociales, los procesos de descentralización de competencias nacionales y la “municipalización de la crisis”, según palabras acuñadas por Daniel Arroyo para explicar la transferencia de responsabilidades a los gobiernos municipales sin su correspondiente transferencia de recursos para hacerlas frente, son algunas de las razones que generaron una resignificación de la comunidad en los años '90. Comunidad como estructura social de participación y con capacidad de representación que se expresa a través de las organizaciones de la Sociedad Civil.

Se observa desde hace más de una década el firme avance de la Sociedad Civil en su derecho a participar. En este sentido, para el caso que nos ocupa, la participación pública ciudadana está amparada por la Constitución Nacional (reforma 1994), cuyo Artículo 41 incorpora el derecho al ambiente sano y considera a la participación popular como forma indelegable de concurrir a la satisfacción de dicho derecho.¹⁵

El concepto de público supone una pluralidad de perspectivas entre aquellos que participan en este campo y de esta manera se abren las puertas a diferencias internas y antagonismos. El ámbito público produce consentimiento por medio de la circulación de discursos que construyen el “sentido común” del momento. En su forma madura -o ideal- según Fraser, incluye suficiente participación y suficiente representación de intereses y perspectivas múltiples para permitirles a la mayoría de las personas, en la mayoría del tiempo reconocerse a sí mismas en sus discursos.¹⁶ Lo expuesto nos permite afirmar que el ámbito público constituye un componente importante en la conformación de la estructura social en tanto terreno discursivo de expresión de un conflicto y como norma de interacción democrática de administración del conflicto dado.

El resultado de la acción conjunta socio-institucional y gubernamental fue un factor decisivo para la sanción de la Ley Provincial 12530 (más conocida como la ley Tunessi) que detallaremos oportunamente, pero que en este punto nos interesa mencionar porque se trata de una normativa cuya aplicación efectivizó la creación de un Comité de Control y Monitoreo (CCyM) conformado por los representantes de las ONGs whitenses, instituciones locales y del sector gubernamental comunal. Vale decir entonces que este marco regulatorio es un instrumento que convalida el derecho a la participación ciudadana en cuestiones ambientales, tal como lo consagra la Constitución Nacional.

La Tipología del Conflicto

Procuramos sostener en este trabajo que un conflicto puede convertirse en un factor motorizador de cambio social. El ciclo de un conflicto hasta su resolución, extinción y/o posible decantación en una experiencia con efectos transformadores, desencadena complejos procesos de negación-aceptación, responsabilidad e inculpación.

En el caso de un conflicto ambiental, la preocupación de los investigadores y especialistas dedicados a las evaluaciones de impacto por comprender -más allá de los efectos tangibles de riesgo- motivaciones subjetivas capaces de generar un conflicto de tales características los llevó a proponer una interesante clasificación del conflicto según sus causas:

- Conflicto cognitivo: Se produce cuando la población tiene diferentes criterios o puntos de vista sobre los hechos.
- Conflicto de valores: se trata de una disputa sobre objetivos; por ejemplo, cuando una acción o resultado es deseable

(o indeseable) o debe (o no debe) ocurrir.

- Conflicto de intereses: Como los costes y los beneficios de una acción raramente se distribuyen equitativamente, algunas personas pueden tener un mayor interés en la actuación que otras. Caso contrario, otras pueden presentar interés en asegurarse que no se lleve a cabo. Es decir, es posible estar de acuerdo en hechos y valores y mantener conflictos de intereses.

- Conflicto de relaciones: Existen diversos fundamentos psicológicos para los conflictos. Cada vez que la gente se comunica, transmite tanto contenidos (hechos, información), como relaciones (cómo es aceptado o valorado, etc.). El hecho es que hay un número de motivaciones emocionales que pueden generar conflictos en campos de diferentes hechos, valores o intereses.¹⁷

Creemos no equivocarnos en afirmar que el conflicto ambiental desencadenado por una de las plantas del polo petroquímico Bahía Blanca en el año 2000 califica con la sumatoria de causas antes enunciadas.

Sustentabilidad de la Industrialización y Actores en debate

Tal como ya hemos señalado, los actores en conflicto en torno del tema de la expansión industrial definen su posición a partir de determinada preocupación primordial. En este mapeo, se partirá de la idea de que dichas preocupaciones se vinculan con el tipo de sustentabilidad que a los diversos actores les interesa garantizar. Así, se buscará identificar a esos actores según el tipo de sustentabilidad desde la que se acercan al problema, definiéndose cuatro tipos, la ambiental, la social, la económica y la política.

Sustentabilidad social

La sustentabilidad social de las radicaciones industriales se vincula con la preservación o el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que moran en cercanías de las plantas. Quienes toman posición en el debate lo hacen intentando impedir las radicaciones de industrias potencialmente contaminantes o bien procurando minimizar los riesgos de accidentes en zonas cercanas a la población

El posicionamiento de los actores que participan en el debate a partir de su preocupación por lo social tiende a complejizarse a partir del cruce de otras variables como la salud de la población circundante, la cuestión empleo y los aportes de las industrias a la localidad whitense. En el caso de la radicación del CPBB y de su posterior expansión en Ingeniero White, quienes han tenido participación en la discusión sobre la industrialización en la zona y sobre sus efectos respecto de la salud han sido los propios vecinos de White (en particular los del barrio 26 de Setiembre) y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) de la localidad, particularmente la Sociedad de Fomento de Ingeniero White, la Asociación Vecinos por la Vida, la Asociación Vecinal de la Costa y la Unión 20 de Agosto, instituciones estas tres surgidas con posterioridad al escape de cloro.

Respecto del aporte de recursos para la realización de obras comunitarias o en beneficio del desarrollo de actividades de las instituciones whitenses, si bien han actuado en favor de su relación con las instituciones beneficiarias, no han causado, en principio, el suficiente impacto sobre la opinión pública. Se puede hipotetizar que una de las principales causas de esto se hallaría en que se han tratado de donaciones circunscriptas sólo a la actividad de determinadas organizaciones y no a beneficiar a toda la comunidad whitense.

En relación con la generación de fuentes de trabajo, es posible encontrar posiciones divididas, ya que mientras, los obreros vinculados con la industrialización (en particular los de la construcción) y las organizaciones sindicales que los representan (UOCRA, SPIQyP, Unión Ferroviaria y CGT) , apoyan su expansión por cuanto observan que se generan así fuentes de trabajo, otras organizaciones, en particular Caritas de Ingeniero White, han observado que, al construirse una planta, llegan muchos obreros de otros puntos del país y de países limítrofes y que, una vez que la obra concluye,

esos trabajadores suelen quedar desocupados, permanecen en el partido de Bahía Blanca y tienen que ser asistidos junto con sus grupos familiares. Por lo tanto, lo que se cuestiona aquí no son los beneficios que, en sí, la construcción de nuevas plantas otorga a los trabajadores sino el agravamiento que la forma en que se encara dicha construcción, ya que produce externalidades sobre los indicadores de pobreza y de asistencia social en Bahía Blanca ¹⁸.

Sustentabilidad ambiental

La sustentabilidad ambiental en la discusión sobre industrialización directamente se relaciona con la preservación de la calidad ambiental. Esta preocupación no se vincula sólo con el entorno cercano a los emplazamientos industriales sino también con cuestiones ambientales de carácter ecuménico. Quienes participan de la discusión desde su interés por la sustentabilidad ambiental, lo hacen buscando impedir la radicación de industrias potencialmente contaminantes o tratando de minimizar los daños que las empresas producen sobre el medio ambiente. En este caso, entre los grupos ambientalistas más radicalizados, existe una oposición total a la instalación de empresas del tipo de las petroquímicas en inmediaciones de los centros poblados.

Respecto de la radicación y expansión del CPBB, los sectores más críticos desde la preocupación por la sustentabilidad ambiental han sido técnicos y científicos vinculados con la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Asociación Ambientalista del Sur, la Agrupación Tellus y el accionar de Greenpeace en el medio local.

Sustentabilidad económica

La sustentabilidad económica en el debate sobre la industrialización se vincula con la búsqueda de generar condiciones tales que permitan la radicación de inversiones. En este caso, la preocupación principal se centra en impulsar líneas de acción que favorezcan la generación de utilidades para los inversores de capital. En este sentido, en el caso del CPBB, quienes se acercan a la discusión desde la búsqueda de preservar la sustentabilidad económica de las inversiones, se centran en tres puntos principales: la seguridad jurídica, la preservación de las reglas de juego de la economía nacional (lo cual representan reclamos comunes a empresarios de todo el país) y la presencia de una infraestructura de servicios adecuada para la producción y el transporte de las mercancías que se elaboran en las plantas.

Los participantes en el debate desde su interés por la sustentabilidad económica son las propias empresas del CPBB y las entidades empresariales e industriales de la ciudad.

En el caso de las Cámaras que agrupan a pequeñas y medianas empresas, la preocupación por la sustentabilidad económica pasaría por dos variables: por un lado, debido a que el vuelco de fondos de las empresas en el pago de salarios y en diversas compras sería favorable para los comercios locales, y por otro, en razón a que algunas de las empresas agrupadas en las Cámaras pueden ser beneficiarias de subcontrataciones de servicios.

Sustentabilidad política

En el caso de los que participan en el debate por la industrialización desde el punto de vista de su sustentabilidad política, existen al menos tres variables que deben ser tenidas en cuenta: por un lado, el impacto que esa industrialización puede tener sobre la generación de puestos de trabajo, sobre todo en un contexto de alta desocupación; en segundo lugar, el estado de la opinión pública, que se vincula con los grados de consenso que, en el seno de la sociedad civil, presentan las diversas posturas en torno del tema; por último, el posicionamiento ideológico que presentan los actores que participan de la discusión poniendo énfasis en este tipo de sustentabilidad.

Entre quienes privilegian en el debate el punto de vista de la sustentabilidad política se encuentra en primer lugar el Municipio, que al momento de fijar su postura en torno de la industrialización, debe tomar en cuenta el estado de la

opinión pública sobre variables vinculadas con ésta tales como el grado de crítica por los problemas de contaminación y de desocupación y el lugar que ocupan estas cuestiones en el orden de prioridades de los vecinos. Asimismo, debe sopesar también las ventajas que las radicaciones industriales de alta tecnología ofrecen en torno al aumento en la recaudación impositiva, la calificación de recursos humanos, inversiones en infraestructura y de la inserción de la ciudad en el mundo. Por último, debe también tener en cuenta el interés de las empresas, no sólo en cuanto a la forma en que producirán sino también respecto del lugar donde pretendan realizar sus inversiones a favor de la maximización de sus utilidades.

El caso del Estado provincial presenta algunas similitudes con el Municipio; sin embargo, el hecho de que la ciudad desde donde toma las decisiones dicho nivel estatal se halle a más de 600 kilómetros de Bahía Blanca le permite ser menos permeable frente a los reclamos vecinales. Por ello, podría sostenerse que su posición frente a la industrialización se hallaría más cercana a las empresas que lo que ocurre con el Municipio.

En lo que respecta al Estado nacional, que no ejerce la responsabilidad sobre el control ambiental de las empresas de tercera categoría, el interés principal frente a la industrialización es mucho más cercano aún a la posición de las empresas, por cuanto se privilegia (y más ante contextos recesivos) cuestiones macroeconómicas tales como la Inversión Bruta Interna, la tasa de desocupación y la recaudación fiscal. Sus políticas pasan por facilitar las condiciones de maximización de las ganancias de las empresas a objetos de mejorar la performance de los indicadores mencionados.

20 de agosto de 2000: un conflicto en estado de ebullición

Cuando en la mañana del 20 de agosto de 2000 los vecinos de Ingeniero White (particularmente que habitaban el barrio 26 de Setiembre) observaron que una densa nube blanca se elevaba desde la planta Cloro Soda de la empresa Solvay Indupa se puso en marcha un proceso de movilización de la población que significó el arribo a su punto máximo del conflicto que, casi desde la instalación del Complejo Petroquímico Bahía Blanca en esa localidad, enfrentó a pobladores e instituciones whitenses con las empresas petroquímicas.

La figura de un conflicto en ebullición viene a reflejar que la movilización de la protesta vecinal que reaccionó ante el escape de cloro de uno de los ductos de Solvay Indupa no fue simple consecuencia de un hecho aislado sino el punto culminante de un proceso caracterizado por la tirantez en la relación entre buena parte de los vecinos whitenses y el Polo Petroquímico debido a la percepción por parte de aquéllos de que este último constituía un agente que ponía en peligro su calidad de vida por la emisión de ruidos molestos y de residuos gaseosos a la atmósfera y líquidos al estuario.

Septiembre de 2000: las aguas comienzan a calmarse

Durante Setiembre, si bien persistía el enfrentamiento en un punto relativamente alto y los piquetes se mantenían, las aguas comenzaron a quietarse. Sin embargo, el estado de cosas había cambiado considerablemente. Uno de los indicadores más demostrativos de dicha situación fue la conformación de la Comisión de Representantes, cuerpo creado para atender a los problemas ambientales con las empresas de tercera categoría y la creación del Comité Técnico Ejecutivo (CTE), organismo formado por profesionales locales con el objeto de realizar un seguimiento de las cuestiones ambientales vinculadas con las empresas de tercera categoría. La Comisión de Representantes estaba compuesta por delegados de la SPA, del Municipio, de la UIBB, de la UNS, de la UTN, del CGPBB, de Prefectura Naval, de la CGT, del Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), de la AAS, de Tellus y de las sociedades de fomento de Ingeniero White, del Boulevard Juan B. Justo y del Barrio 26 de Setiembre. AL CTE lo conformaban delegados de la SPA, la municipalidad, el CGPBB, la UIBB,

la UNS, la UTN y el SPIQyP y un veedor que representaba a las sociedades de fomento del barrio 26 de Setiembre, del Bulevar Juan B. Justo, de Ingeniero White y de Saladero. La Comisión de Representantes constituía el paso previo al establecimiento del Comité de Control y Monitoreo, previsto en el proyecto de ley reelaborado por el diputado Juan Pedro Tunessi, que en esos días se hallaba en tratamiento en la Legislatura Bonaerense. También la constitución del Comité Técnico Ejecutivo estaba prevista en el mismo proyecto.

Los Vecinos Autoconvocados consideraban que la Comisión de Representantes y el Comité Técnico Ejecutivo carecían de validez e insistieron en la necesidad de realizar una exhaustiva auditoría sobre las empresas. Entendían que las mismas debían ser externas y solicitaban que los vecinos y Greenpeace actuaran como “veedores”.

También Greenpeace tuvo una activa participación durante la primera quincena de Septiembre. Trascendió el envío de una carta por parte de la organización a las autoridades de Solvay en Bélgica, a objeto de solicitar que se informara a la comunidad acerca de los programas de prevención de accidentes y respuestas a emergencias de empresa. Se sostenía que “las empresas químicas deben contemplar y dar a conocer estos documentos cuando operan en los países más industrializados y deberían hacerlo también en la Argentina”¹⁹.

Sobre mediados de mes Greenpeace requirió a la Justicia la medida cautelar de no innovar respecto a la clausura de las plantas de Solvay Indupa. La acción judicial era compartida por la Fiscalía General de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. La organización ecologista creía que además de la clausura decidida por la SPA debía mediar un dictamen de la Justicia Federal tendiente a impedir la puesta en marcha de las respectivas plantas hasta que se verificara el estado de seguridad de las instalaciones. En La Plata, mientras tanto, el proyecto de ley presentado por el diputado Tunessi avanzaba rápidamente. En su texto se estipulaba que la Secretaría de Política Ambiental, en coordinación con la municipalidad de Bahía Blanca, sería la autoridad de aplicación de la norma. Se señalaba allí que la autoridad de aplicación establecería el plan de monitoreo del área de Bahía Blanca en relación a las emisiones y fugas gaseosas generadas por las industrias y a los efluentes líquidos que se produjeran. Se preveía que la ejecución de los programas estarían a cargo de un Comité Técnico Ejecutivo integrado por profesionales con asiento en Bahía Blanca y dotado con los elementos necesarios para cumplir con el programa. A la vez, se planteaba la creación de un Comité de Control y Monitoreo que estaría conformado por representantes de la SPA, el Ejecutivo municipal y el HCD, al que se invitaría a participar a organismos e instituciones vinculados con la seguridad y operatividad del área portuaria, entidades gremiales y gremiales-empresarias, a asociaciones ambientalistas y a sociedades de fomento con jurisdicción en el ámbito de aplicación de la ley. Este comité tendría carácter consultivo y asesoraría a la autoridad de aplicación en la ejecución del programa, siendo la participación allí honoraria. Por último, para solventar lo previsto por la ley, se autorizaba al municipio a implementar una tasa ambiental cuyo pago estaría a cargo de las industrias afectadas por las disposiciones de la ley²⁰.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados provincial durante setiembre de 2000 y el día 21 ingresó al Senado. Finalmente, también sería aprobado más adelante en la Cámara Alta y la Ley quedó sancionada, siendo publicada el 16 de noviembre en el boletín oficial con el número 12530.

Consideraciones Finales

La ciudad es el ámbito de convivencia de proyectos y aspiraciones, de conflictos sociales y políticos, de confrontación de grupos con valores, intereses y recursos diferenciados que finalmente estructuran su modo de funcionamiento. La dinámica propia de cada ciudad refleja los términos de la distribución del poder, las coaliciones y alianzas y, a la vez, las concepciones dominantes acerca del Estado. En este escenario se plantea para el caso que hemos tratado, la relación comunidad –industria. Si bien todo tipo de relación es compleja y entraña múltiples aristas, particularmente el binomio comunidad –industria en Bahía Blanca mantiene una interacción conflictiva y tensional, con ciclos de meseta

y picos de agravamiento cuando han acontecido eventos tecnológicos como el que hemos descripto.

Ahora bien, más allá de las inversiones en la seguridad de los procesos productivos, que efectivamente han concretado las empresas radicadas en el Polo petroquímico bahiense, y más allá de los esfuerzos de estos grupos económicos por llevara adelante una política de puertas abiertas a la sociedad, creemos que existen razones más profundas que atentan contra la convivencia industria –comunidad en el caso local.

Entendemos que esta relación está atravesada por una deslegitimación social de la presencia industrial en Bahía Blanca y particularmente en el territorio de Ingeniero White. Nuestra localidad posee una histórica tradición de ciudad –puerto, cabecera de una amplia región agrícola y ganadera y puerta de salida a los mercados externos de la producción pampeana. Por múltiples razones de orden político y económico de escala nacional y mundial, este modelo fue perdiendo gravitación, dando paso a la poderosa y expansiva industria química y petroquímica de capitales multinacionales, extraña y exógena porque no fue forjada por un proyecto genuino, “localista” con evolución en el tiempo. En este sentido, la radicación industrial y las transformaciones en el paisaje, territoriales, ambientales y socio productivas que este hecho supuso, fue asumido por la localidad que la alberga –sin consulta previa- como un avallasamiento, una imposición y por lo tanto algo ajeno a la comunidad. Siguiendo esta línea entonces, la industria no es parte de la comunidad; es la industria y la comunidad como modo de relación de quiebre o fractura. Vale decir, la concepción de comunidad deja afuera a la industria.

Frente a esta situación de desarraigo territorial o no pertenencia, una de las partes intenta justificarse, legitimarse frente a un imaginario social que la descalifica. No obstante, este proceso podría haberse revertido y dado entonces una aceptación social, si las industrias hubiesen alcanzado a satisfacer las expectativas de desarrollo de empleo y de surgimiento de actividades productivas por multiplicación de efectos. Como hemos señalado en el trabajo, esta consigna no se ha cumplido. Como se sabe, este tipo de industrialización contribuye fuertemente al Producto Bruto Nacional, pero la distribución y transferencia directa al ámbito local no alcanza –en realidad porque no se trata de la única variante- para poner a una comunidad en el camino de la prosperidad. Esta circunstancia también puede ser vista por el colectivo como una defraudación a las expectativas.

Por otra parte, sin lugar a dudas es la cuestión ambiental el fusible de la relación comunidad-industria. Mientras que el paradigma de la seguridad tecnológica ha sido instalado en el discurso industrial y en otros ámbitos académicos, la sociedad lo receptiona con sospechas y hasta con reticencias, en tanto operan distintos símbolos, distintas significaciones para los mismos hechos. Los problemas ambientales o de contaminación no se solucionan con abundancia de explicaciones técnicas, muchas veces incomprensibles para los ciudadanos, sino admitiendo que existen perturbaciones y responsabilizándose de tomar las medidas necesarias para repararlo. Básicamente, la impresión es que las industrias deberían manejarse con mensajes claros, transparentar la información si se proponen ganar la credibilidad de la población. Pese a todo, la sensación de sospecha, de ocultamiento y la amenaza de riesgo subsisten en el colectivo social.

Los costos en términos de calidad de vida y los beneficios que genera la presencia industrial química y petroquímica en Ing. White, estarían indicando una relación cargada de fuertes asimetrías. Ambas partes del binomio parecerían ser conscientes de ello. Como una forma de contrarrestar esas asimetrías, el sector industrial pone en implementación una política comunitaria. En el caso de nuestro estudio hemos observado que, las actividades “hacia la comunidad” o de “puertas abiertas”, tienden a coincidir con las necesidades más focalizadas de los vecinos de la localidad portuaria. Así el sector industrial interviene con importantes aportaciones en salud, cultura, educación, obras urbanísticas y promoción comunitaria. Pese a la aplicación de estas estrategias de integración o incorporación al medio social – que sin dudas significan una importante contribución- el nudo que ata la relación también manifiesta otra asimetría en

términos de “necesitados” y “proveedor de recursos”. En síntesis, procuramos demostrar a partir del mapeo que en determinados grupos de la sociedad civil, subyace una sensación de pretender ser apaciguados o acallados en sus reclamos por parte de un sector industrial que procura “pagar”, si se nos permite la expresión, el costo de su presencia con acciones comunitarias.

Ahora, una mirada totalizadora a la cuestión impone la necesidad de ubicarnos en la posición de la industria. Para ello recurrimos a la ayuda de la psicología. Desde la perspectiva de investigadores en esta disciplina sobre esta problemática se señala que, la sociedad actual se encuentra “contaminada” por fuertes sentimientos de fastidio, indignación, desamparo impotencia e incertidumbre y, que frente a un escenario de riesgos tangibles como los que construye la industria -más allá de las medidas de control y mitigación que utilicen- se visualiza un “culpable” en donde descargar el malestar de una vida cotidiana insegura y difícil²¹

Reformulando esta idea y -por cierto- desde una postura maniqueísta cabría interrogarnos en qué lugar ubica el sentido común (tal como lo enuncia Habermas y revisa Fraser) de la comunidad local a la industria. Intentamos en este trabajo avanzar sobre una identificación de actores y análisis de posiciones que nos permitan más adelante llegar a una reflexión que hoy no estamos en condiciones de arriesgar.

En otro orden, como se planteó al iniciar este trabajo, partimos del supuesto de considerar al conflicto como motorizador del cambio social. El pensamiento de los teóricos que hemos consultado, nos han ayudado a comprender este fenómeno, como fenómeno social y la observación de la realidad y de la dinámica de las fuerzas sociales en torno al caso que hemos tratado, dan cuenta de ello. La experiencia que hemos detallado demuestra que la emergencia ambiental de Agosto de 2000 desencadenó una reacción social que involucró a un amplio espectro de actores que se manifestaron de múltiples formas, desde aquellas más formales hasta otras radicalizadas. Además, hemos podido observar a través del mapeo que –siguiendo a Fraser- las relaciones discursivas entre públicos con diferente poder, adoptaron la forma de discusión y también la de deliberación. Esto supone la existencia de condiciones para la actividad participativa de la sociedad a través de diferentes canales de mediación y representación como asociaciones vecinales, ONG’S, ámbitos políticos, sindicales, académicos y otros que oportunamente hemos identificado. La sustentabilidad ofició de eje transversal de esta propuesta. Resta señalar al respecto para completar y concluir el esquema que, sobre la existencia de este marco de participación entendemos que se basa la sustentabilidad del sistema democrático, en tanto constituyen mecanismos de administración del conflicto. En este sentido, la noción política de desarrollo sustentable que se cristaliza en un modelo que aspira a la gobernabilidad fue para Bahía Blanca durante la gestión de gobierno analizada, un caso concreto de aplicación. La instrumentación de mecanismos de fortalecimiento de la participación de la sociedad civil junto a experiencias de debate y concertación para la toma de decisiones en determinadas cuestiones (como por ejemplo el proceso de planificación estratégica), amplió el espacio de representación y de gestión conjunta entre el estado, el sector privado y los sectores intermedios. Consideramos que este ejercicio participativo que fue puesto en práctica a partir del año 1998 en la ciudad, resulta una variable que explica el comportamiento de los diferentes actores frente al conflicto, el surgimiento de nuevas y significantes asociaciones ciudadanas al momento del conflicto y especialmente, la resolución del mismo. En este sentido importa resaltar la sanción de la llamada por los bahienses “Ley Tunessi” que hemos señalado anteriormente. Insistimos en subrayar la connotación de localía o pertenencia de esta normativa, ya que se la visualiza como un logro alcanzado por la movilización, presión, negociación y concertación conjunta de la sociedad civil, instituciones y poderes municipales y provinciales. A favor de ello podría argumentarse que esta ley –si bien de carácter provincial- rige con exclusividad en el área industrial del complejo químico y petroquímico de la localidad de Ing. White . El rol que le confiere esta legislación al Comité de Control y Monitoreo, cristaliza el derecho ciudadano amparado por la Constitución Nacional en su artículo 41 que ya hemos citado.

Para concluir, nos permitimos señalar que este caso que hemos tratado nos pone en diálogo con Nancy Fraser a quien hemos recurrido en varias ocasiones. Entendemos que esta experiencia local se encuadra en la concepción de “Público Fuerte” que estructura la autora, a la vez que representa un avance democrático, en tanto se presencia un desvanecimiento de la separación del estado y la sociedad civil (separación tan celosamente defendida en el modelo de Habermas). Así, “el público fuerte es la fuerza práctica y la obligación del estado escuchar la opinión y dar respuesta”²²

Finalmente, cabría preguntarnos: ¿Es necesaria y posible la convivencia comunidad-industria? Es necesaria ya que la sociedad actual debería tender a la búsqueda de nuevas formas de relación en el marco de una democracia representativa y participativa, donde se recupere la credibilidad y la confianza a partir de igualdades en las reglas de juego que permitan mitigar insalvables asimetrías.

¿Es posible? No nos animamos a afirmarlo. Sin embargo, lo cierto es que el debate se halla instalado en la sociedad local. Los sectores organizados de la comunidad se perciben en estado de alerta permanente. Por el lado de las industrias, el foro llevado a cabo en 1999 sobre “Desarrollo y Comunidad”, el “Primer Congreso Internacional sobre Industria y Medio Ambiente” de 1997 y las “II Jornadas de Actualización Petroquímica” del año 2002, cuyo objetivo apuntaba a “...intentar establecer mecanismos de comunicación entre las empresas y los distintos representantes de la comunidad”, ponen de manifiesto que la preocupación es recurrente y queda mucho camino por recorrer.

Notas

1 Acto por la memoria realizado en Ing. White, al cumplirse seis años del accidente tecnológico en la Planta Solvay –Indupa organizado por la Agrupación “Cultura en Movimiento”, la agrupación política “Frente Amplio” y diversas instituciones civiles de la localidad de la localidad portuaria. Ing. White, 19 de agosto de 2006

2 A los efectos de esta comunicación, sólo presentaremos una reseña de dicho mapeo que fue ampliamente desarrollado por el Sociólogo Ceferino Sabatini en informes preliminares.

3 La documentación utilizada para la realización de este trabajo corresponde a las fuentes de la prensa local, reportes periodísticos registrados por los medios radiales y televisivos, entrevistas personales a informantes clave y demás material gráfico pertinente al tema. La tarea de recopilación de las fuentes primarias de información, su análisis y la definición de los lineamientos sobre su posible aplicación metodológica se llevó a cabo en colaboración con el Sociólogo Ceferino Sabatini con quien compartimos el interés por el tema de estudio aquí desarrollado. Por este motivo, desde el año 1997 se ha procurado formar un archivo temático –en el marco del Plan Estratégico de Bahía Blanca 1997-2003- que se procura mantener actualizado.

4 Nancy Fraser: “Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente”. En: Debate feminista, marzo 1993, pág. 43

5 Max Weber, Escritos Políticos, México, Folios, 1984, tomo I.

6 Nos referimos al autor Julio Pinto, cuya obra: Max Weber actual. Liberalismo ético y democracia, Bs. As, Eudeba, 1996, hemos consultado para la elaboración este trabajo.

7 Julio Pinto, Op.cit. pág. 170

8 Atendiendo a esta idea resulta interesante introducir una definición del concepto de Sociedad Civil, i en este sentido es concebida “ como un espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Es distinta de la ‘sociedad’ en general, por cuanto involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones, ideas, intercambiar información alcanzar objetivos comunes , realizar demandas al estado y aceptar responsabilidades oficiales del estado. La sociedad civil es una entidad intermedia entre la esfera privada y el estado” 9Larry Diamond: Repensar la Sociedad Civil. En: Metapolítica, vol. 1, Número 2, Puebla, 1997.

10 Cfr: Ralf Dahrendorf: Clases sociales y conflictos de clase en la sociedad industrial, Munich,1961, págs. 122-123

11 Julio Pinto, Op.cit. pág. 176

12 Ibidem

13 Tomás Grigera: “Industria y Comunidad”. En: II Jornadas de Actualización Petroquímica, Bahía Blanca, octubre de 2002, pág. 181.

14 En el mismo sentido, Nancy Fraser entiende que la idea de comunidad “...sugiere un grupo restringido y bastante homogéneo y muchas veces connota consenso”. Vide: Nancy Fraser: “ Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente”. pág. 46

15 “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la Ley. (...) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales.” Constitución Nacional de la República Argentina, Art. 41 , 1994

16 Nancy Fraser: Op.cit. pág 32

17 Creighton (1981). Citado en: Larry Canter: Manual ... , Op. cit., pág. -más allá de los efectos tangibles de riesgo- 738

18 Los sindicatos de Bahía Blanca han observado también este problema y por ello uno de sus reclamos consiste en que se privilegie la contratación de mano de obra bahiense para la construcción de nueva infraestructura.

19 Fuente: La Nueva Provincia, 2/9/2000.

20 Fuente: La Nueva Provincia, 31/8/2000.

21 Adaptación del comentario de Tomás Grigera, tomado de un artículo publicado en la Revista del Instituto del Petróleo y Gas, año 2002.

22 Nancy Fraser, Op. Cit., pág. 56